

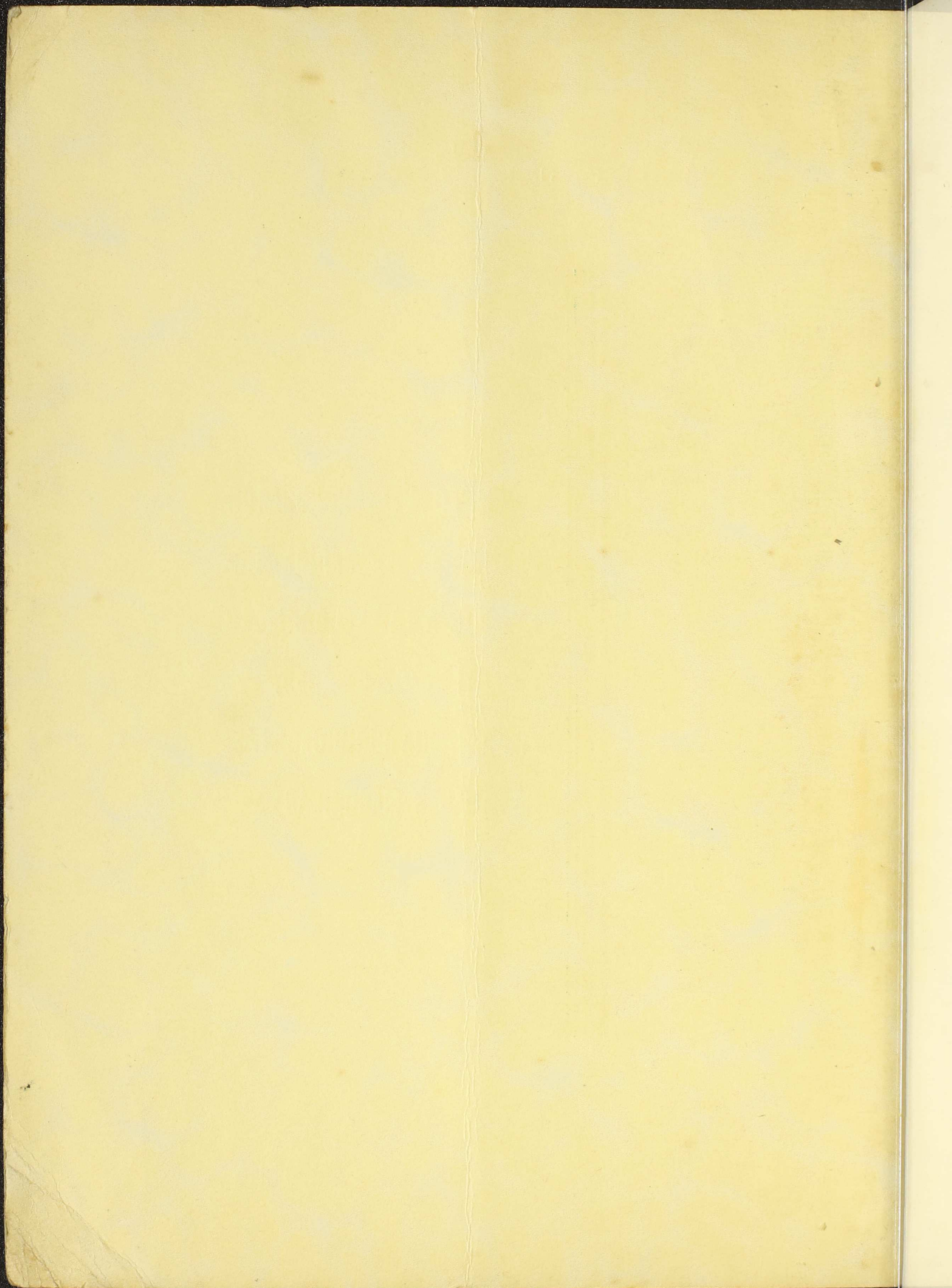
ABSALON FERNANDEZ DE SOTO

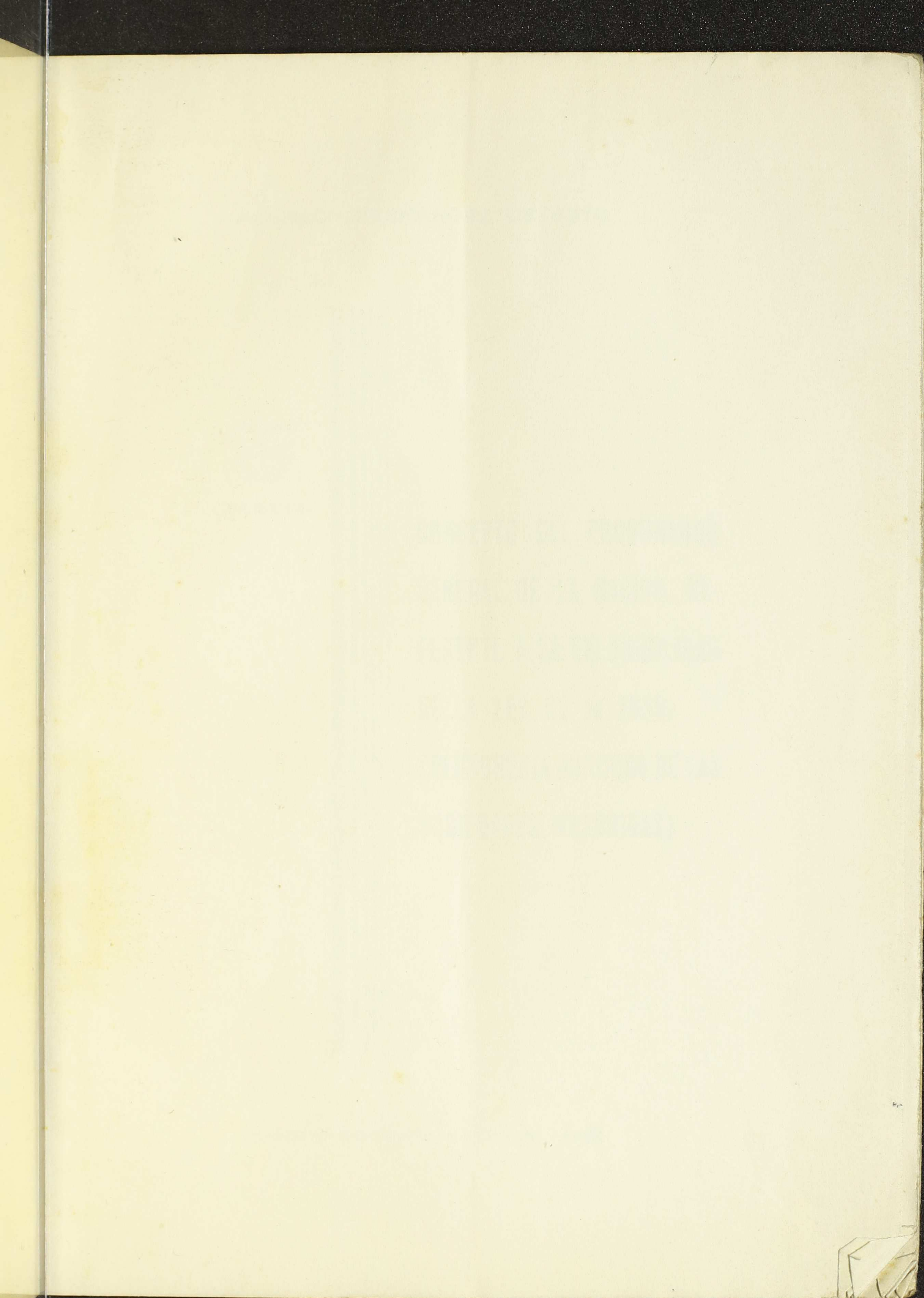


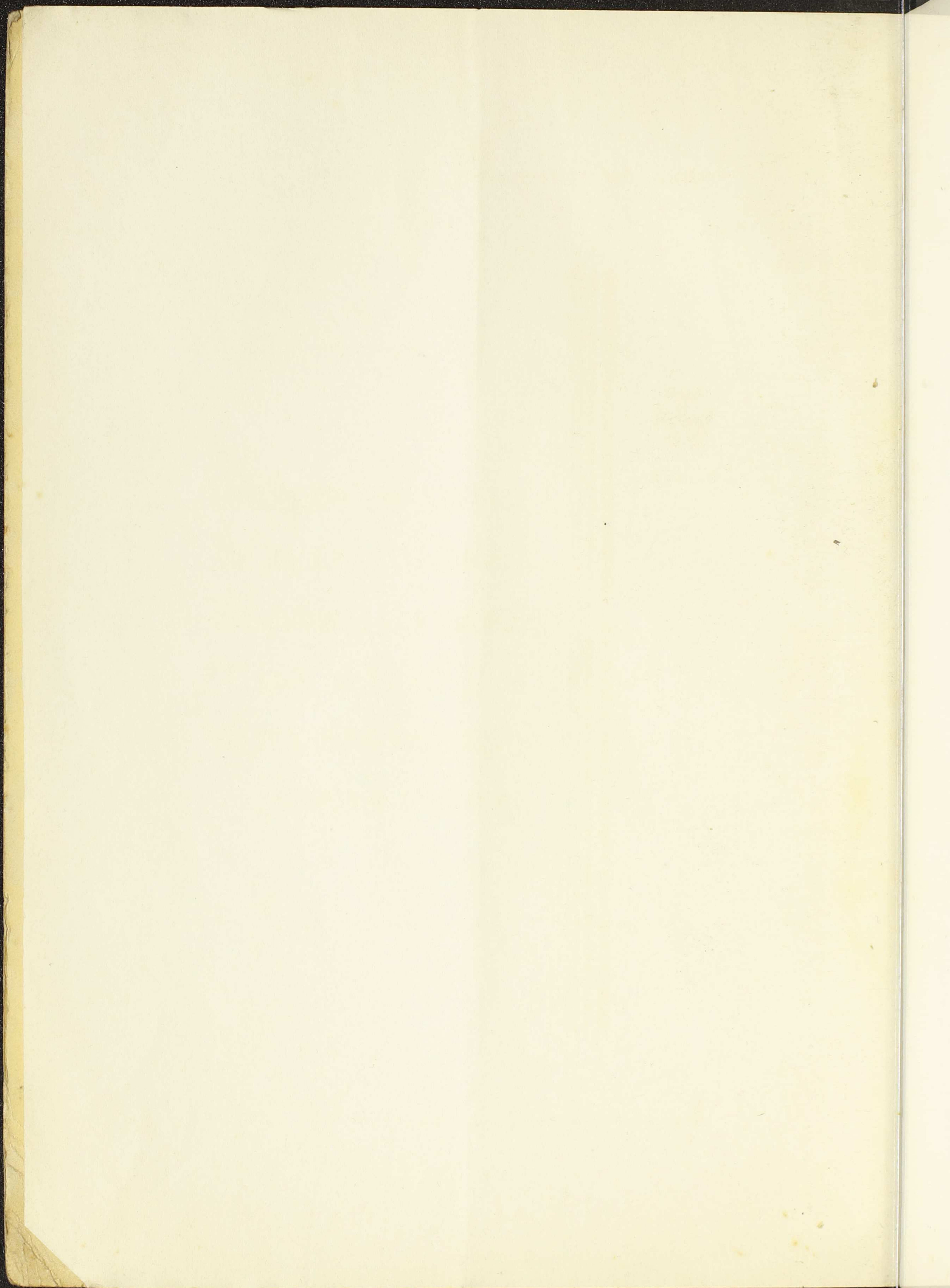
COLOMBIA

CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION, RE-
FERENTE A LA EXEQUIBILIDAD
DE LA LEY 62 de 1935.
(PERSONERIA JURIDICA DE LAS
SOCIEDADES MASONICAS)

BOGOTA - IMPRENTA NACIONAL - 1936







ABSALON FERNANDEZ DE SOTO



COLOMBIA

CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION, RE-
FERENTE A LA EXEQUIBILIDAD
DE LA LEY 62 de 1935.
(PERSONERIA JURIDICA DE LAS
SOCIEDADES MASONICAS)

BOGOTA - IMPRENTA NACIONAL - 1936

MEMORIO DE LA COMISION DE LA LEY DE LA LEY

MEMORIO DE LA COMISION DE LA LEY DE LA LEY

MEMORIO DE LA COMISION DE LA LEY DE LA LEY

MEMORIO DE LA COMISION DE LA LEY DE LA LEY

MEMORIO DE LA COMISION DE LA LEY DE LA LEY

MEMORIO DE LA COMISION DE LA LEY DE LA LEY

MEMORIO DE LA COMISION DE LA LEY DE LA LEY

MEMORIO DE LA COMISION DE LA LEY DE LA LEY

Señores Magistrados de la honorable Corte Suprema de Justicia—Sala Plena.

El doctor Carlos Bravo, abogado ilustre y destacado miembro de la sociedad, en demanda de 28 de febrero del año en curso, ha solicitado de esa alta corporación que declare inexecutable, por violatoria de la Constitución de la República, la Ley 62 de 1935, "por la cual se concede la personería jurídica a las sociedades masónicas," cuyo artículo único dice así:

"Las sociedades masónicas podrán obtener del Gobierno personería jurídica de acuerdo con la ley y decreto que reglamentan la materia."

MOTIVOS DE LA DEMANDA

Se funda el demandante en que dicha Ley es contraria al artículo 49 de la Constitución Nacional, que preceptúa lo siguiente:

"Artículo 49. Las corporaciones legítimas y públicas tienen derecho a ser reconocidas como personas jurídicas y a ejecutar en tal virtud actos civiles y gozar de las garantías aseguradas por este Título, con las limitaciones generales que establezcan las leyes, por razones de utilidad común."

En el orden adoptado por el actor aparece el anterior precepto como el que, en primer lugar, ha sido violado, y fundamenta su aserto así:

“El sentido natural y obvio de esta disposición se traduce en esta afirmación simple: para que una asociación o corporación pueda ser reconocida como persona jurídica, debe reunir dos condiciones irremisiblemente: que sea *legítima*, que sea *pública*.”

El doctor José María Samper, cuya autoridad se relleva en este caso por haber intervenido activamente en la expedición del Estatuto de 1886, expone a propósito del artículo 49, a la página 96 del segundo tomo de sus comentarios, entre otros conceptos, el siguiente:

“Compréndese también que, a más de ser *legítimas* las corporaciones, esto es, reconocidas o autorizadas por la ley, han de ser *públicas* (subraya el autor). Sería por todo término absurdo el que las sociedades o corporaciones secretas (que siempre son peligrosas para el Estado y contrarias al orden común) fuesen reconocidas como personas jurídicas, sin que por esto fuesen conocidos los miembros componentes de aquellas corporaciones ni sus bienes, derechos y acciones, ni sus actos secretamente ejecutados.”

Expuesto y ampliado luego por el doctor Bravo el primer fundamento de su solicitud, enuncia el segundo, haciéndolo consistir en que la Ley 62 de 1935 viola también el artículo 38 de la Constitución, que dice:

“La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación: los Poderes Públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social.

“Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será oficial, y conservará su independencia.”

Al desarrollarlo, afirma el demandante “que ese artículo comprende la obligación, para las autoridades de la República, de respetar la legislación canónica,” e inserta un pasaje del memorial que el Excentísimo señor Arzobispo Primado dirigió al Senado de la República cuando se discutía el proyecto respectivo, del cual pasaje aparece que la masonería está prohibida bajo pena de excomunión por el canon 2335 del Código Eclesiástico.

Acusada de inconstitucional, como lo ha sido, la Ley en referencia, os corresponde decidir definitivamente sobre su exequibilidad, previa audiencia del Procurador General de la Nación.

Al cumplir con el deber de emitir el concepto que me corresponde y para apreciar la eficacia de las razones que sustentan la demanda, conviene examinar previamente la transformación que sufrió el proyecto, antes de convertirse en la Ley 62 acusada, al pasar de la Cámara de Representantes a la de Senadores.

EL PROCESO DE LA LEY EN EL CONGRESO

El proyecto fue presentado a la Cámara baja y allí se aprobó en tercer debate en su forma original, que decía así:

“Proyecto de ley número ...

por la cual se concede la personería jurídica a las sociedades masónicas.

“El Congreso de Colombia

DECRETA:

“Artículo. Son personas jurídicas, además de las reconocidas por el Título 36 del Libro I del Código

Civil, por la Ley 57 de 1887 y por la Ley 153 de 1887, las sociedades masónicas domiciliadas en Colombia.”

Como se ve, en este texto la personería jurídica de las sociedades masónicas quedaba reconocida por la Ley. Era, pues, una disposición legislativa de excepción, como la que se dio a favor de los establecimientos de beneficencia y de instrucción pública y de las iglesias y asociaciones religiosas de la Religión Católica.

Para sustentar la constitucionalidad de dicho precepto se dijo en la exposición de motivos que los autores de la Constitución de 1886 no habían prohibido el funcionamiento de esa clase de corporaciones, según aparece del texto en que se consagró el derecho de asociación y de la discusión que precedió a su adopción, y que sería irrisorio permitir el derecho de asociación conforme al artículo 47 de la Constitución y negar luego, en virtud del 49, el derecho a la personería jurídica. Además, se hicieron en los debates algunas disquisiciones gramaticales acerca del oficio que desempeñan algunas palabras contenidas en el texto del 49, con el objeto de demostrar que en la locución “corporaciones legítimas y públicas” la *y* es una conjunción disyuntiva y la palabra *públicas* indica “reunión de vecinos.”

Contra tales razonamientos se pronuncia la demanda en su parte expositiva. El Procurador no comparte tampoco la deducción que, para defender el proyecto, se hizo de premisas que son admisibles en el campo puramente doctrinal. La teoría que se insinúa en la referida exposición de motivos sobre la inconsistencia y precariedad del derecho de asociación cuando no va acompañado en forma irrestricta

del derecho de reconocimiento de la personería jurídica, tiene autorizados propugnadores. No ocurre lo propio en las legislaciones escritas y especialmente en el derecho público colombiano.

Es evidente que el artículo 49 de la Constitución no prohibió la formación y funcionamiento de las sociedades masónicas. Ni el texto, ni su historia, ni la aplicación que le dieron los autores y defensores de la Carta de 1886, ofrecen al respecto la menor duda. El asunto fue materia de docta controversia en el Consejo de Delegatarios, al cabo de la cual se aprobó la fórmula que rige, después de haber negado las proposiciones que directa o indirectamente prohibían ese tipo de asociaciones o coartaban su libre funcionamiento.

Pero uno es el derecho consagrado por el artículo 47 de la Constitución colombiana, a cuyo amparo han vivido las sociedades masónicas, y otro es el derecho que por el artículo 49 de la misma Constitución tienen las corporaciones legítimas y públicas a ser reconocidas como personas jurídicas. Lo primero es un derecho primordial del individuo como ser humano y debe comprenderse entre las garantías sociales propiamente dichas. Lo segundo, o sea la investidura de personería jurídica, regula un género superior de actividades, indispensable sin duda para el mejor aprovechamiento del derecho de asociación. Sin embargo, ésta no es razón para aceptar la confusión entre los dos, o la afirmación de que reconocido en un caso concreto, el ejercicio del primero, se vulnere éste, o pierda su virtualidad esencial al no conceder personería jurídica a una asociación por el solo hecho de existir y hallarse garantizada su existencia.

La significación de dependencia que equivocada-

mente se atribuyó por los sustentadores del proyecto original al artículo 49 de la Constitución, la referencia histórica que se hizo respecto del 47 y el ligero examen filológico del texto del 49, no son ciertamente argumentos idóneos para demostrar la conformidad de los preceptos constitucionales con el propósito de la Cámara de otorgarle personería jurídica a las sociedades masónicas, por vía de excepción. Así debió entenderlo el Senado cuando, no obstante incurrir, al estudiar el proyecto, en las mismas confusiones que acabo de anotar, resolvió sustituirlo redactando un texto absolutamente diferente, que aprobado y adoptado en ambas Cámaras recibió, sin objeción ninguna, la sanción ejecutiva y vino así a ser la Ley 62 de 1935, materia de esta controversia. Es pertinente reproducir nuevamente su texto:

“LEY 62 DE 1935

(NOVIEMBRE 27)

por la cual se concede la personería jurídica a las sociedades
masónicas.

“*El Congreso de Colombia*

DECRETA:

“Artículo único. Las sociedades masónicas podrán obtener del Gobierno personería jurídica de acuerdo con la ley y decreto que reglamentan la materia.

“Dada en Bogotá a veintiuno de noviembre de mil novecientos treinta y cinco.

“El Presidente del Senado, PARMENIO CARDENAS—El Presidente de la Cámara de Representantes, HORACIO ORTEGA—El Secretario del Senado, *Rafael Campo A.*—El Secretario de la Cámara de Representantes, *Carlos Samper Sordo.*

"Poder Ejecutivo—Bogotá, noviembre 27 de 1935.

"Publíquese y ejecútese.

"ALFONSO LOPEZ

"El Ministro de Gobierno,

"Alberto LLERAS CAMARGO"

VALOR JURIDICO DE LA LEY

Conocido el anterior proceso legislativo, procedo a exponer el valor jurídico que en concepto de la Procuraduría tiene el texto de la Ley acusada.

¿Modifica él en alguna forma en favor de las sociedades masónicas el estatuto legal que determina las condiciones de las asociaciones que pueden obtener personería jurídica y los requisitos que deben llenar para alcanzar su reconocimiento?

Es la parte preceptiva de la Ley la que debe ser materia de este examen, pues es en ella en donde aparece la manifestación de la voluntad del legislador. Por el artículo único de esta Ley se dice que "las sociedades masónicas podrán obtener del Gobierno personería jurídica de acuerdo con la Ley y Decreto que reglamentan la materia."

Por vía de análisis vamos a descomponer el texto en dos partes: Primera: "las sociedades masónicas podrán obtener del Gobierno personería jurídica," y segunda: "de acuerdo con la Ley y Decreto que reglamentan la materia."

Si se toma la primera parte aisladamente, sin relacionarla con la segunda, podría entenderse que el legislador dispuso que dichas asociaciones tuvieran un derecho de excepción conforme al cual el Gobierno debía concederles la personería jurídica sin más

requisito que la solicitud que ellas le hicieran y, en este caso, habría que entrar a examinar si este precepto, considerado independientemente, contrariaba o no la Ley fundamental, o, en otros términos, si al dictarlo el legislador había obrado dentro de los límites constitucionales.

En la segunda parte, que es complemento de la primera, aparece expresamente manifestada la voluntad del legislador de que las sociedades masónicas al solicitar la personería jurídica y el Gobierno al concederla deben obrar de acuerdo con la Ley y Decreto que reglamentan la materia. Esta sujeción de las logias al derecho común no resulta aquí por vía de análisis, deducciones e interpretaciones. Ella aparece de manifiesto en las palabras sencillas y obvias del texto comentado.

Los dos miembros no pueden desarticularse porque forman entre sí una sola regla, si así puede llamarse, que expresa el modo o forma como el legislador quiso que las sociedades masónicas tuvieran existencia jurídica. Esta no emana de la Ley, como se propuso en un principio, ni esa Ley autoriza al Gobierno para que la reconozca sin sujeción a las condiciones legales a que están sometidas las asociaciones ordinarias.

No puedo creer que lo dicho en el título de esta Ley pueda servir para fundar una objeción seria contra las anteriores apreciaciones, o que dicho título pueda servir para desvirtuar la parte declarativa de la Ley. No siempre el título de las leyes armoniza con su parte preceptiva. El caso presente es un ejemplo de ello. Al sustituir el Senado el proyecto en la forma que ya se vio, pasó por alto su enunciado, que cuadraba muy bien con el texto original que negó,

y según el cual las sociedades masónicas quedaban comprendidas entre las personas jurídicas de existencia legal. Pero el no haberlo sustituido, por descuido o porque no vio su total desconexión con el texto, es omisión que no altera la sustancia de la Ley y que jurídicamente carece de trascendencia. Se trata de una inexactitud manifiesta como lo observa el demandante, quien se la atribuyó al “preámbulo” y no al “título,” incurriendo en un *lapsus* involuntario.

Mirado en su conjunto, como es de rigor, el texto de la Ley acusada, resulta sin lugar a duda que él no crea una situación nueva para las asociaciones denominadas “sociedades masónicas,” ni menos les otorga privilegio alguno, comoquiera que las dejó sometidas al régimen común que regula la materia, es decir, a la ley civil y al decreto reglamentario. Es superfluo agregar que también quedaron sometidas a los preceptos constitucionales, pues ni expresa ni implícitamente aparecen éstos modificados en la Ley, ni el legislador dispuso en ella ni podía disponer que la solicitud y concesión de personería jurídica pudiera hacerse con prescindencia de los principios consignados en la Constitución, que es la ley de las leyes, a cuyo obedecimiento están sometidos los individuos, grupos o corporaciones de que se compone la nacionalidad, mientras aquélla esté vigente y sin que sea preciso advertirlo en los actos ordinarios del legislador.

PRIMERA OBJECCION

La Ley Fundamental dice—artículo 49—que las corporaciones *legítimas y públicas* tienen derecho a ser reconocidas como personas jurídicas, y se ha objetado en la demanda que las sociedades masónicas no

participan simultáneamente de esos caracteres y que al decir la Ley que ellas podrán obtener del Gobierno personería jurídica les atribuye un derecho del cual están excluidas por la Constitución, de donde resulta el vicio de aquélla y el fundamento de la solicitud de inexequibilidad.

El texto de la Ley, según lo hemos visto, no contiene en forma alguna la atribución del derecho que se les discute a dichas asociaciones, y los antecedentes de su expedición, ya expuestos, nos revelan que los legisladores se abstuvieron de reconocerlo directamente o de mandarlo reconocer por un procedimiento de excepción. Al convertirse dicho texto en Ley de la República no modificó ni alteró la situación que tenían las referidas sociedades delante de la legislación que trata del derecho a la personería jurídica y del procedimiento para obtener que sea reconocido.

SITUACION JURIDICA DE LAS LOGIAS ANTES DE LA LEY

La situación jurídica de las logias, antes de la expedición de la Ley 62, no era distinta en manera alguna. Hubieran ellas hecho su solicitud y llenado las condiciones y requisitos exigidos por el derecho común, o, lo que es igual, "de acuerdo con la Ley y Decreto que reglamentan la materia," y ellas habrían adquirido el derecho al reconocimiento de la personería jurídica, pues no habría sido ni justo ni legal de parte del Gobierno desconocer ese derecho fundándose en que hacía falta una declaración legislativa como la que aparece en el texto de la Ley acusada.

Es verdad que el Estado concede la personería jurídica a determinadas corporaciones públicas por medio de una declaración del poder legislativo, pero a la luz de los principios generales del derecho, el legislador no debería usar de esta potestad sino a favor de las corporaciones de derecho público o que en alguna forma participan de las funciones estatales. Las demás, aunque sean públicas por sus fines, deben quedar sometidas al régimen común. Los privilegios o procedimientos por vía de excepción son “contrarios a las instituciones democráticas,” como lo observó la Comisión del Senado a propósito del proyecto que aprobó la Cámara.

Pero si la prodigalidad del legislador en esta materia no se justifica, incurriría, de otro lado, en denegación de justicia el Gobierno que desconociera un derecho que se adquiere mediante la realización de ciertos hechos que se regulan por el derecho común. Sería además inconcebible y aberrante que un Estado regido por instituciones democráticas presuponga la existencia de corporaciones formadas a virtud de una garantía constitucional (artículo 47) y a los cuales se les cegaran sistemáticamente todos los medios instituídos para disfrutar de la vida del derecho.

El carácter de *legítimas* lo han tenido y de él han disfrutado. Si no fuere así, su disolución se habría decretado. La demanda no impugna expresamente esta primera calidad, pues en tal caso lo procedente no sería oponerse simplemente al reconocimiento de su personería jurídica, dejando que continúen la vida irregular y contraria a la ley que se las supone y que se permitió o “toleró” por gobernantes y gobernados, sino que debió pedirse su disolución a partir del momento en que se adquirió el juicio fundado de que su

formación, funcionamiento y fines eran contrarios a las normas de la Constitución. Pero siendo legítimas, o admitiendo que lo son, no puede pretenderse que se las considere fuera de la ley. Y a tanto equivale el pretender que se les desconozca por este aspecto el derecho a obtener la personería jurídica.

Pero en la demanda obra como raíz de la acusación contra la Ley 62 la afirmación de que las sociedades masónicas no son asociaciones *públicas*, debiendo serlo para obtener el reconocimiento de la personería jurídica.

EL CARACTER DE LAS ASOCIACIONES

La calidad de *públicas* de las corporaciones, como la de *legítimas*, no se adquiere, en concepto del Procurador, sino en virtud de su formación misma. Dichas calidades no son atributos que la Ley concede o pueda conceder o desconocer, ni su existencia depende de que se conformen o no con el preconcepto o prototipo ideal que de ellas tengamos. No son abstracciones. Son hechos y como tales deben comprobarse. El carácter *legítimo* de una corporación resulta de que su formación no sea contraria a la moralidad ni al orden social, de donde síguese que sin examinar previamente su formación no podemos atribuirle o desconocerle a una corporación el carácter de legítima.

Del mismo modo ha de procederse para conocer si una corporación es o nó *pública* en el sentido preciso que este adjetivo tiene en el artículo 49 de la Constitución.

El método de calificar *a priori* estas calidades, sin otra guía que las definiciones gramaticales, no es precisamente el más propicio para producir en el

ajeno entendimiento el juicio favorable que buscamos y conduce, sin quererlo, al círculo vicioso y a las equivocaciones que han de servir para suministrarle aliento y estímulo a la controversia. El demandante, doctor Bravo, que con razón critica las acepciones de la palabra *público-ca* escogidas por los sustentadores del proyecto, también acude luego al Diccionario de la Lengua para tomar de él las citas que estima pertinentes y que no suministran tampoco un criterio seguro para dirimir la cuestión, según va a verse.

El doctor Bravo no acepta, como es natural, que el vocablo *públicas* agregado al sustantivo corporaciones en la declaración constitucional, sea otro sustantivo y que él signifique “común del pueblo o ciudad” o “conjunto de personas que participan de unas mismas aficiones, o con preferencia concurren a un mismo lugar,” o “conjunto de vecinos.”

Mas para sustentar su tesis de nulidad contra la Ley 62, sienta la premisa de que la autorización de formar asociaciones *privadas*, contenida en el artículo 47 de la Constitución, “no comprende, antes bien excluye, las sociedades secretas por razón de la diferencia sustancial que existe entre una y otra cosa.” Y para demostrarla hace, por su parte, el siguiente razonamiento:

“Gramaticalmente son diversos los significados de los adjetivos *privado* y *secreto*. Según el Diccionario de la Academia de la Lengua, *privado-da* significa: que se ejecuta a vista de pocos, familiar y domésticamente y sin formalidad ni ceremonia alguna. Particular y personal de cada uno. M. El que tiene privanza. Ad. m. ant. Presto, luego, al punto,” en tanto que “*secreto-ta* (del lat. *secretus*. p. p. *secernere*)

adj. Oculto, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de los demás. Callado, silencioso, reservado.”

“Por donde puede colegirse—deduce el doctor Bravo—que el término *privadas* que emplea el artículo 47 de la Constitución no incluye las sociedades secretas, y al contrario manifiestamente las repugna, dada la diferencia completa de significados que se advierte entre los dos vocablos.”

Como se ve, el demandante ha tomado el adjetivo *privado-da* en las acepciones que ese vocablo tiene en el lenguaje común, que son las de que se ocupa generalmente el Diccionario de la Lengua, lo que naturalmente le permite contraponerlo al adjetivo *secreto-ta* y llegar por el mismo camino a la conclusión que he transcrito, y que juzgo no menos equivocada que la que él impugna.

Los vocablos *público* y *privado*, empleados en los artículos 47 y 49 de la Constitución, tienen una significación jurídica especial que los aparta no poco del sentido natural y obvio con que comúnmente se usan en el lenguaje extraforense. El adjetivo *privadas*, por ejemplo, en el artículo 47 tiene un sentido puramente económico. Se refiere a las compañías o sociedades privadas, así llamadas por los fines de interés particular que persiguen. Ese término no excluye, pues, el término “secreto,” ni tampoco lo incluye. Entre los dos no hay punto de relación, de diferenciación o contradicción. Por el primero se expresa un concepto de derecho positivo. El segundo es una palabra sin contenido jurídico para los fines legales que nos ocupan, pues ni el constituyen-

te, ni el legislador la tomaron en cuenta al regular el derecho de asociación y el reconocimiento de la personería jurídica.

EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO

Lo que a juicio del Procurador debe ser materia de este estudio no es el valor usual de los vocablos sino la figura jurídica que se contiene en cada uno de los que aparecen en los preceptos constitucionales ya citados.

Desde el punto de vista del Derecho, y especialmente a la luz del Derecho Público colombiano, el carácter de las corporaciones se conoce por sus fines. En manera alguna por las denominaciones que adopten o les atribuyan sus amigos o adversarios. Si sus fines son públicos porque atienden al interés común o social, públicas serán. La Ley no las podrá considerar como privadas, las cuales se caracterizan por los fines de utilidad privada, de interés particular o de lucro que principalmente persiguen, ni menos como “secretas,” “ocultas,” “clandestinas” o “ignoradas,” cuyos fines no se conocen ni pueden ser conocidos y, por tanto, no son susceptibles de clasificación legal.

La norma positiva dice:

“Artículo 49. Las corporaciones legítimas y públicas tienen derecho a ser reconocidas como personas jurídicas y a ejecutar en tal virtud actos civiles y gozar de las garantías aseguradas por este Título (el III), con las limitaciones generales que establezcan las leyes, por razones de utilidad común.”

No se me oculta que el enunciado del principio aquí consignado causa, a primera vista, un poco de

perplejidad e incertidumbre. Parece como si el Estado colombiano al darse la ordenación jurídica contenida en la Carta de 1886, hubiera contemplado o presumido la existencia de corporaciones *públicas* preexistentes como realidades sociales, que son personas públicas por definición, natas, congénitas o predestinadas, y esto no es ni puede ser así. La única corporación o colectividad que tiene tales atributos, o participa de ellos, es el Estado. El Derecho le da una ordenación, pero no le infunde personalidad. Nace con ella. Las demás corporaciones no son originarias sino que derivan el sujeto y la capacidad jurídica del Estado, a virtud de actos de concesión suyos, inclusive las que comparten su potestad política, y por eso se han llamado de Derecho público, o estatales, como ahora se dice, como los Departamentos y los Municipios. Acaso la fórmula constitucional sería más clara si dijera: "las corporaciones *que sean* legítimas y públicas, etc.," del propio modo que en el artículo 47 se dice: "Es permitido formar compañías o asociaciones públicas o privadas *que no sean* contrarias, etc."

No es tampoco clara en nuestra legislación la delimitación entre las personas de derecho público, que son corporaciones públicas por su estructura propia y por sus fines, y las que sólo lo son por este último concepto.

En todo caso, el derecho a la investidura jurídica de que trata el artículo 49 de la Constitución, se refiere a las corporaciones públicas, apellidadas así en las legislaciones positivas por razón de los fines de utilidad social que realizan o se proponen realizar.

Estas corporaciones, exclusión hecha de las de Derecho público y de las creadas o reconocidas directamente por la ley, requieren para entrar a los dominios de la realidad social de un proceso de formación, que se inicia en el acto de su constitución, o sea el acuerdo de sus miembros sobre la existencia y el fin de la asociación y sobre los derechos y obligaciones de los asociados, y que termina con la expedición de los estatutos, o conjunto de normas que regulan la estructura interna de la asociación y la forma de su funcionamiento, sin que sea preciso que estos actos consten en instrumentos separados. Si el objeto y fines a que se dedica son de utilidad pública, la corporación será *pública* y tendrá los derechos y obligaciones legales anexos a ese tipo de asociaciones.

Para adquirir capacidad como personas de derecho y actuar como tales, las corporaciones están obligadas a comprobar en cada caso los hechos que han dado nacimiento a su formación, esto es, su constitución, y los fines de interés general y público que les son propios. El examen de estos hechos es del resorte del Estado, quien lo verifica, entre nosotros, por medio de los funcionarios del orden ejecutivo del Poder público.

Al poder ejecutivo le está atribuída, pues, la competencia para el reconocimiento de la personería jurídica de las corporaciones que se titulan públicas y que no recibieron o no adquieren la calidad de personas de derecho privado por privilegio de la Constitución o de la ley. En este caso se encuentran las sociedades masónicas, domiciliadas en Colombia, y a las cuales se refirió la Ley demandada.

EL PROCEDIMIENTO

Por consiguiente, y no existiendo por lo demás ningún precepto constitucional o legal que en alguna forma les haya vedado de antemano el uso de los derechos y garantías propios de las asociaciones, las sociedades masónicas han tenido y tienen abierta la vía legal para solicitar del Poder Ejecutivo el reconocimiento de la personería jurídica, y libres son también para situarse dentro de la órbita legal que da origen a ese derecho.

La petición se tramitará, no lo dudo, como una solicitud común, del mismo modo que lo habría sido en cualquier tiempo.

“De acuerdo con la Ley y Decreto que reglamentan la materia,” el poder ejecutivo, por conducto del Ministerio de gobierno, examina previamente si la asociación que pretende la personería es o no contraria a la moralidad o al orden legal y si los fines a que sirve son o no de interés público. Estos requisitos se comprueban aquí mediante la presentación del acta de constitución y de los estatutos de la asociación. Sin estos documentos la solicitud no es, ni puede ser tramitada.

UN COMENTARIO DE DON JOSE MARIA SAMPER

Y caben aquí unas observaciones muy respetuosas al margen del comentario de don José María Samper, insertado en la demanda. Hay constancia de que el delegado señor Samper sustentó ante el Consejo de delegatarios la fórmula original del proyecto de Constitución que excluía de la libertad de asociación

a ciertas sociedades que en la fórmula se denominan secretas. No es impertinente recordar que el Cuerpo constituyente la negó, lo mismo que las dos que la siguieron, propuestas por los delegados Paúl y Caro y las cuales tenían por objeto someter a dichas sociedades a un régimen especial de vigilancia. Con todo, al comentar posteriormente el señor Samper el artículo 49 de la Carta, en un libro suyo muy consultado, dice:

“Compréndese también que, a más de ser *legítimas* las corporaciones, esto es, reconocidas o autorizadas por la ley, han de ser *públicas*. (Subraya el autor). Sería por todo término absurdo el que las sociedades o corporaciones secretas (que siempre son peligrosas para el Estado y contrarias al orden común) fuesen reconocidas como personas jurídicas, sin que por esto fuesen conocidos los miembros componentes de aquellas corporaciones ni sus bienes, derechos y acciones, ni sus actos secretamente ejecutados.”

La primera parte de este concepto es inobjetable, comoquiera que es lo que se deduce rectamente de los términos del texto constitucional. La segunda es frágil y quebradiza. Se refiere a caracteres que, en su hora, fueron debatidos por los constituyentes y no tenidos en cuenta por ellos para legislar, como se pidió, sobre ese tipo de sociedades que se llaman secretas. Para el mismo señor Samper tales caracteres no eran esenciales o propios de la masonería. En su discurso contra las logias, acaso por él olvidado, afirmó, y no comoquiera sino con “persuasión,” que “en Colombia, en los Estados de la Costa, la francmasonería no ha sido conspiradora ni atea, ni se ha inge-

rido en la política. Allí ha sido asunto de filantropía, de pasatiempo, de ceremonias pueriles y de cenas y banquetes.” Y más adelante alude a las personas “distinguidas, de acrisolada honradez y moderadas que hay en el seno de la francmasonería,” y agrega: “Pero esas personas son excepcionales y pertenecen a esas logias inofensivas de la costa del Atlántico, que se entretienen en actos de beneficencia, cuando no en cenas y banquetes. Las logias políticas y anti-religiosas son muy distintas.”

De esta suerte tenemos que, según el señor Samper, estas asociaciones son susceptibles de clasificarse en logias que se ocupan en *asuntos de filantropía y beneficencia* y otros menesteres inofensivos, y logias *políticas y antirreligiosas*. (Véase *Antecedentes y debates de la Constitución de 1886*).

No fue mayor el acierto del señor Samper en la última parte de su ligero comentario. Los caracteres de una corporación tienen forzosamente que ponerse en evidencia al pretender la personería jurídica y, reconocida ésta por un acto del Gobierno—que es lo que dice la ley acusada,—conocidos serán los miembros componentes cuyo conocimiento sea indispensable conforme a los trámites establecidos al efecto, y no se comprende que una persona jurídica adquiera bienes, derechos y acciones que puedan no ser conocidos. Sabido es que las asociaciones de toda especie no adquieren la capacidad patrimonial sino cuando son o llegan a ser personas jurídicas, y éstas, como las personas naturales, no ejercen actos civiles sino por los medios y con las solemnidades establecidas por las leyes.

Durante la tramitación pueden intervenir los terceros que consideren lesionados sus derechos desde

cualquier punto de vista, y legalmente no habría razón para que se desatendieran las objeciones fundadas contra la autenticidad de los documentos aducidos o contra la exactitud de su contenido. Y si el reconocimiento de personería jurídica lo hiciera el Gobierno adoptando un procedimiento de excepción mediante el cual se omitiera la comprobación de los requisitos esenciales, entonces la resolución ejecutiva quedaría viciada de nulidad y no la Ley 62, cuya única regla, si así puede llamarse, declara o afirma que las sociedades en referencia quedan sometidas al régimen común para los efectos del reconocimiento de su personería jurídica. Lo procedente entonces sería acudir al Tribunal respectivo en demanda de la invalidez de dicha resolución por violatoria de los artículos 47 y 49 de la constitución, del título 36 del código civil y del decreto reglamentario número 1326 de 1922.

SEGUNDA OBJECCION

Se aduce también en la demanda que la Ley 62 de 1935 viola el artículo 38 de la Constitución, en el cual se reconoce el hecho de que la Religión Católica, Apostólica, Romana es la de la Nación, y se estatuye que los Poderes Públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. En desarrollo de esta tesis, se afirma que las sociedades masónicas son enemigas tenaces y fervientes del credo católico, y se cita el principio legal que obliga a las autoridades de la República a respetar la legislación canónica, que es independiente de la civil y no forma parte de ésta. A este respecto se aduce un párrafo del memorial que el Excelentísimo señor Arzobispo Primado dirigió al Senado

cuando se discutía el proyecto, y en el cual el jefe de la Iglesia observa que la masonería está prohibida bajo pena de excomunión por el canon 2335 del código eclesiástico.

Dada la unidad doctrinal de la Constitución de 1886, y que especialmente se nota en los artículos que proclaman la libertad de conciencia, en forma absoluta, y con ciertas limitaciones la de reunión, la de asociación y el derecho de las asociaciones públicas a constituirse como personas de derecho privado, lo expuesto hasta aquí bastaría para responder a esta última objeción.

Ni la formación de una asociación, de cualquier clase que sea, ni el reconocimiento de su personería jurídica pueden, según lo hemos visto, ser contrarias a la moralidad o al orden legal, que es el establecido según los principios de la Constitución. Entre ellos está incluido el que impone a los poderes públicos el deber de proteger la Religión Católica y el de hacerla respetar como esencial elemento del orden social. Si en alguna forma se vulneró este principio al permitir o dejar que se organizaran esta clase de asociaciones, entonces la objeción se refiere a su formación, contra la cual no se ha recurrido a pesar de que el cargo se funda en el conocimiento de sus fines o de uno de ellos, perseguido en forma, 'tenaz y ferviente.' Y si la personería jurídica es la que se ha reconocido o va a ser reconocida con violación del referido principio constitucional, la objeción es valedera contra la respectiva resolución del poder ejecutivo, a quien le fue atribuída esta función. En ningún caso contra la lay acusada, que nada ordena o preceptúa y, por tanto, nada estatuye que pudiera

servir de apoyo o de pretexto para permitir actos u omisiones que sean contrarios a la moral y el orden legal existentes.

Además, no debe perderse de vista que la personería jurídica y de modo muy especial la que se obtiene mediante resolución del poder ejecutivo, por razones obvias coloca a las corporaciones bajo el control y vigilancia del Estado.

Finalmente, la existencia, funcionamiento e incorporación de las sociedades masónicas en las actividades sociales del país no es un suceso de ayer o de hoy, que tenga nexo o vinculación alguna con la ley demandada o que jurídica o socialmente le sea imputable al poder legislativo que la expidió. Son hechos anteriores a la ley en referencia cuya realidad se manifiesta constantemente en las convocatorias que para actuar o reunirse hacen tales sociedades en las formas usuales de publicidad, que han tenido expresión corporativa, participando en actos públicos solemnes y cuya permisión o consentimiento procede de las libertades esenciales proclamadas en la Constitución de 1886.

El fuero eclesiástico tampoco ha sido invadido por el poder legislativo al aprobar el texto legal que declara lo que no requería declaración expresa y especial, o sea que las sociedades masónicas podrán obtener capacidad jurídica conforme a la legislación preexistente. Esta facultad no les estaba vedada o prohibida antes en manera alguna y la disposición legal que innecesariamente la proclama en forma nominativa carece de la virtud de afectar la prohibición para los católicos de pertenecer a tales sociedades, bajo pena de excomunión contenida en el código eclesiástico, cuya órbita espiritual o jurisdiccional

sigue siendo respetada por las autoridades, sin que pueda perder su intangibilidad por la vigencia de esta ley o por el reconocimiento de las garantías constitucionales a los individuos y asociaciones domiciliados en Colombia.

El universitario señor Jorge Leiva, con el derecho que le da la acción pública, coadyuvó la demanda. En su razonado escrito presenta cuatro argumentos que he examinado atentamente y que, en el fondo, se reducen a los dos que le sirvieron al demandante para sustentar su tesis de inexequibilidad, a saber: que la Ley es violatoria del artículo 49 de la Constitución y que con su expedición se violó también el artículo 38 de la misma. La refutación de las razones alegadas por el señor Leiva la ha hecho el Procurador en el curso de este alegato.

En resumen: la fuente legal de la existencia de las sociedades masónicas domiciliadas en Colombia no se halla, señores Magistrados, en la Ley 62 de 1935 sino en la libertad de asociación, que es una de las garantías sociales consagradas en el artículo 47 de la Constitución vigente. Dicha Ley no confiere la personería jurídica para aquéllas, ni contiene el principio de donde emane su reconocimiento como entes de derecho. El texto que recibió la aprobación del Congreso y mereció la sanción ejecutiva únicamente contiene la declaración,—innecesaria y sin valor positivo,—de que la pueden adquirir, lo que equivale a afirmar una posibilidad o expectativa que tenían con anterioridad a la expedición de la Ley cuya validez ha sido sometida a vuestra decisión.

Y un texto como éste, que nada ordena ni regula, que no introduce innovación en los estatutos legales, que carece, en fin, de virtualidad ^{por sí} ~~para la~~ misma, no vulnera, por tanto, la ley fundamental de la República. Contra lo que reza su título, no tiene un objeto propio, siendo de advertirse que los Parlamentos suelen expedir leyes sin objetividad positiva o que reproducen simplemente el objeto de leyes anteriores.

Mas como la declaratoria de inexecuibilidad de la Ley 62 de 1935 implicaría el desconocimiento de derechos que la Procuraduría estima preexistentes, y como la simple reproducción en la Ley de las normas positivas del derecho no extralimita la órbita constitucional del legislador, me opongo a la demanda y os pido que en guarda de las garantías sociales y derechos civiles reconocidos en la Constitución y leyes de la República, declaréis en cambio que es exequible la Ley que pasa a vuestra consideración.

Bogotá, julio 9 de 1936.

Señores Magistrados,

ABSALON FERNANDEZ DE SOTO,

Procurador General de la Nación.

